



**NOTA IMPORTANTE:**

- I. En el presente Informe Justificado se cita la tesis de jurisprudencia **2º/J.149/2002**, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **131/2002-SS**, la cual tiene por rubro: **"RENTA. LAS "CARTAS INVITACIÓN" EMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO CONSTITUYEN EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO."**
- II. Los Juzgados Cuarto y Séptimo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo, en el Estado de Zapopán, Jalisco, Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutierrez, Primero, Cuarto y Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, determinaron **SOBRESEER**, el juicio de amparo respecto a la aplicación del artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, **al considerar que no existe acto de aplicación respecto a los requerimientos de pago emitidos por la CNBV, pues únicamente se tratan de simples "cartas invitación"**.
- III. Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Tercer Circuito, en el Estado de Jalisco, determinó **CONFIRMAR LAS SENTENCIAS RECURRIDAS**, en los A.R 263/2015 y 5/2016, al no existir acto de aplicación del artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos.

**529-III-DGACAA-DAA-(XAC)-46582**

**1673824**

**QUEJOSO: SERVICIOS GLOBALES DE LIQUIDEZ, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M, E. N. R.**

**JUICIO DE AMPARO: 137/2023**

**CUADERNO PRINCIPAL**

**ASUNTO: SE RINDE INFORME JUSTIFICADO Y SE DESAHOGA REQUERIMIENTO.**

**VENCIMIENTO: 04 DE MAYO DE 2023**

**Ciudad de México, a 27 de abril de 2023**



230426N0045

**LFD RF 2014 ART 29 E FRACC VII DERECHOS  
POR SUPERVISIÓN CNBV DE OBLIGACIONES  
ART 95 BIS LGOAAC**

**H. JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.**

**BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 1950  
COL. TLACOPAC DELEG. ÁLVARO OBREGÓN  
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01049.**

El **C. Presidente de la República**, autoridad indicada como responsable en el presente juicio de amparo, señala que las notificaciones relativas al presente asunto, **se sigan haciendo mediante la interconexión**, y solo en caso de que exista un problema tecnológico en citada plataforma, se señala como domicilio para recibir notificaciones relativas al presente asunto, las oficinas de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ubicadas en **Avenida Insurgentes Sur Número 795, Nápoles, Benito Juárez, Código Postal 03810, en la Ciudad de México**, con el debido respeto comparezco a exponer:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **117** de la Ley de Amparo, se rinde **SE RINDE INFORME JUSTIFICADO**, en los términos siguientes:

**ACTOS RECLAMADOS**

**SON CIERTOS** los actos reclamados al **C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA**, consistentes en la **promulgación y orden de publicación** del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, específicamente el artículo **29-E, fracción VII**, que reclama la quejosa.



**NO SON CIERTOS** los demás actos reclamados al **C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**.

**COMPETENCIA DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DE LA REPRESENTACIÓN DEL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.**

Toda vez que, en el juicio de amparo **citado al rubro**, se está controvirtiendo la constitucionalidad de la **Ley Federal de Derechos**, en términos del artículo 9º, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el Ejecutivo Federal podrá ser representado por la Secretaría de Estado en los términos del acuerdo general que para tal efecto expida y se publique en el Diario Oficial de la Federación.

En efecto, el referido precepto legal, establece lo siguiente:

"[...]"

**Artículo 9o. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.** En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos.

**El Presidente de la República será representado en los términos que se señalen en el acuerdo general que expida y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Dicha representación podrá recaer en el propio Consejero Jurídico o en los secretarios de estado a quienes en cada caso corresponda el asunto, en términos de las leyes orgánicas y reglamentos aplicables.** Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En el citado acuerdo general se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos [...]"

(Énfasis añadido).

Con fecha **25 de marzo de 2019**, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, tal y como se desprende del escrito inicial de demanda, el quejoso en el juicio de amparo que nos ocupa, impugna la constitucionalidad de la **Ley Federal de Derechos**, por lo que se actualiza el supuesto contemplado en el **Artículo Tercero, fracción VI, numeral 30** del Acuerdo General citado, mismo que establece

**"ARTÍCULO TERCERO. Se otorga la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites establecidos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los Secretarios de Estado, cuando en el juicio de amparo se reclame alguna de las leyes, reglamentos, normas generales o actos siguientes:**  
[...]"

**VI. Al Secretario de Hacienda y Crédito Público:**

[...]  
**30. Ley Federal de Derechos.** [...]"

(*\*Énfasis añadido*).

De la transcripción realizada, se destaca que se otorga la representación del Presidente de la República a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando en un juicio se impugne la constitucionalidad de la **Ley Federal de Derechos**, tal y como acontece en la especie.

Más aún, en términos del artículo 9, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, cada dependencia señalará en su reglamento interior, la unidad administrativa competente a efecto de llevar a cabo la representación presidencial, por lo que con fundamento en el artículo 28, fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente, la unidad administrativa competente a efecto de representar al Presidente de la República, es la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, tal y como se desprende de la siguiente transcripción del referido artículo:

**"Artículo 28.-** La Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos tiene las atribuciones siguientes:

[...]  
**III.-Representar a la persona Titular del Ejecutivo Federal en los juicios de amparo respecto de aquellos asuntos que correspondan a la Secretaría, en términos de la Ley de Amparo.** Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;"  
(*Énfasis añadido*).

Del precepto invocado, se destaca que se otorga a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, la atribución para ejercer la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 9, de la Ley de Amparo vigente, misma que, como ya se estableció con la cita del mismo, consiste en la representación y defensa jurídica de la persona Titular del Ejecutivo Federal.

Es por lo anterior, que la unidad administrativa competente a efecto de representar a la persona Titular del Ejecutivo Federal en el presente juicio de amparo, y en todos los trámites relativos al mismo, es la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.

### **DESAHOGO REQUERIMIENTO**

Me refiero al oficio que contiene el acuerdo de fecha de 24 de abril de 2023, mediante el cual, se ordena reexpedir el oficio 16209/2023 mismo que contiene el acuerdo de 14 de abril de 2023, dirigido a la suscrita autoridad **C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos** por medio del cual, requiere a las autoridades responsables para que remitan copia certificada y legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder en relación con el acto reclamado.

Al respecto, se menciona que a la suscrita autoridad se le reclama la promulgación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, por lo tanto, al tratarse de

un hecho notorio la promulgación del referido ordenamiento, se solicita a ese H. Juzgado, tener por cumplimentado el requerimiento de mérito.

Lo anterior, pues como es de explorado derecho, el Diario Oficial de la Federación es el órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, **de carácter permanente e interés público, que tiene como función publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente.**

En ese orden de ideas, se deber de tomar en cuenta esa publicidad del acto reclamado, para la existencia del original del Diario Oficial de la Federación que es fácilmente constatable como hecho notorio, más aún cuando existe la presunción legal de conocerlo por parte de la autoridad judicial, ya que basta que la autoridad judicial tenga conocimiento del acto jurídico que invoca la parte interesada como publicado en el Diario Oficial de la Federación, que derivan del hecho material de haber sido difundido en una fecha precisa y su contenido, para que la autoridad judicial esté en condiciones de pronunciarse sobre ese aspecto, **porque se trata de un acontecimiento notorio que deriva de fuentes de información que la ley garantiza le deben ser proporcionadas por otros órganos del Estado.**

Resultan aplicables, por analogía los criterios siguientes:

Época: Décima Época. Registro: 2003033, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3. Materia(s): Civil, Común. Tesis: I.3o.C.26 K (10a.). Página: 1996

**DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA.** Los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales son claros al establecer que el Diario Oficial de la Federación es el órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, que tiene como función publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente; asimismo, establecen cuáles actos son materia de publicación, a saber, las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión; los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general; los acuerdos, circulares y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de interés general; los tratados celebrados por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; los acuerdos de interés general emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico Oficial; y aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el Presidente de la República. Luego, la circunstancia de que una parte dentro de un juicio aporte en copia simple un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, por el que pretende acreditar una especial situación jurídica que le afecta, no puede considerarse en modo alguno como un documento que tiene



valor indiciario del hecho que se pretende demostrar, porque ha quedado establecido que la naturaleza del Diario Oficial es la de ser un órgano de difusión de los actos que la propia ley señala, y en razón de su finalidad de dar publicidad a los mismos, es que ninguna autoridad puede desconocer su contenido y alcance; en tal virtud, es de colegirse que el acto de publicación en ese órgano de difusión consta de manera documental, por lo que su presentación en una copia simple ante la autoridad judicial, no puede justificar un desconocimiento del acto por aquélla, sino que tiene el deber de tomar en cuenta esa publicidad del acto patente en el documento presentado en copia simple que refleja la existencia del original del Diario Oficial de la Federación que es fácilmente constatable como hecho notorio, más aún cuando existe la presunción legal de conocerlo por parte de la autoridad judicial, porque atento a lo establecido por el artículo 8o. de la citada ley, el Diario Oficial debe ser distribuido gratuitamente a los tres Poderes de la Unión y debe proporcionarse a los gobernadores de los Estados -incluido el Distrito Federal- una cantidad suficiente de ejemplares. Basta que la autoridad judicial tenga conocimiento del acto jurídico que invoca la parte interesada como publicado en el Diario Oficial de la Federación, que derivan del hecho material de haber sido difundido en una fecha precisa y su contenido, para que la autoridad judicial esté en condiciones de pronunciarse sobre ese aspecto, porque se trata de un acontecimiento notorio que deriva de fuentes de información que la ley garantiza le deben ser proporcionadas por otros órganos del Estado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 302/2012. Novamedic Seguros de Salud, S.A. de C.V. 14 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

Época: Décima Época. Registro: 160180. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. X/2012 (9a.). Página: 293

**TASAS DE INVERSIÓN. SU VARIACIÓN EN EL TRANCURSO DEL TIEMPO ES UN HECHO NOTORIO QUE NO REQUIERE PROBARSE EN JUICIO.** Para cualquier ciudadano, aun sin conocimiento de términos financieros, resultan evidentes las modificaciones de las variables económicas que invariablemente afectan el comportamiento de las tasas de inversión; tan es así, que ese fenómeno económico repercute de forma manifiesta en la inflación y, por ello, en el poder adquisitivo de las personas al elevarse los precios de los bienes que conforman la canasta básica y el resto de las cosas, lo cual se refleja directamente en la capacidad económica de la población y en las finanzas públicas. **En esas condiciones, la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del cambio de las tasas, no es lo que hace a ese indicador financiero público y notorio, sino todos los elementos que incurren precisamente para que éstas varíen.** En consecuencia, al ser del conocimiento general las circunstancias descritas, **la variación de las tasas de interés en el transcurso del tiempo es un hecho notorio cuyo acreditamiento en juicio resulta innecesario, sin que ello implique relevar a las partes de la carga de la prueba respecto de los porcentajes de variación de esos índices económicos.**

Amparo directo 3/2010. José Manuel Félix Tinajero. 8 de junio de 2011. Mayoría de tres votos. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Impedida: Olga Sánchez





Cordero de García Villegas. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

**Por lo anterior se solicita tener por cumplimentado el requerimiento que se desahoga y dejar sin efectos el apercibimiento decretado en autos.**

**SOLICITUD PARA QUE LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES DEL PRESENTE JUICIO SE REALICEN A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE GESTIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.**

En atención a que con fecha 25 de septiembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "**CONVENIO** de Colaboración para la interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional que celebran, por una parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, y, por la otra, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", en el cual se estableció en la Cláusula Tercera, lo relativo a las Notificaciones Vía Electrónica, conforme a lo siguiente:

**"CLÁUSULAS**

**(...)**

**TERCERA. NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA.**

De conformidad con lo previsto en los artículos 23, 34 y 35 del Acuerdo General 9/2020, 55, 56, 61, 62 y 65 del Acuerdo General 12/2020, "LA SHCP" manifiesta su conformidad en que las notificaciones relacionadas con los juicios de amparo en los que de acuerdo a su competencia le corresponda intervenir como autoridad responsable, o procedimientos en los que tenga cualquier otra calidad de parte competencia de "LA SCJN" o de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo de "EL CJF", se realicen por la vía electrónica, de conformidad con los efectos previstos en los Acuerdos Generales citados; es decir, surtirán sus efectos a partir de que se genere el acuse de recepción y consulta en el sistema de interconexión del órgano notificado o ante la falta de dicha consulta, a las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción, salvo en el supuesto de los incidentes de suspensión de amparo, en el que el plazo será de veinticuatro horas."

Asimismo, derivado del citado **CONVENIO**, se emitió la "**DECLARATORIA** del 05 de julio de 2021, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2021, **en la cual se estableció que se iniciaría operaciones a partir del 12 de julio de 2021**, y en su Base 3 expresamente disponen:

"3.- "LA INTERCONEXIÓN" será aplicable en los términos indicados en los juicios de amparo, en los diversos juicios competencia de la SCJN y de los órganos jurisdiccionales del PJF a cargo del CJF y en los recursos señalados en las bases 1 y 2 de esta declaración, cuando hayan sido iniciados o presentados antes del doce de julio de dos mil veintiuno, únicamente previa solicitud expresa, realizada por quien cuente con la capacidad procesal para representar a la SHCP en el juicio o recurso correspondiente. Al respecto, las notificaciones, la consulta y la posibilidad de

promover por "LA INTERCONEXIÓN", operarán con posterioridad a la notificación del proveído que acuerde favorablemente esa solicitud. Se exceptúa de esta regla la notificación de todos los acuerdos de requerimiento de superior jerárquico en cumplimiento de ejecutoria, requerimientos de información y, en general, cualquier acuerdo de trámite dirigido a la SHCP en aquéllos asuntos en los que no sea parte en el juicio y hasta ese momento no hubiese intervenido en el mismo, de modo que se realizará mediante "LA INTERCONEXIÓN", a través del uso de la FIREL o de la e.firma, la notificación del proveído respectivo; así como de los siguientes que se dicten, aun y cuando los procedimientos o recursos respectivos hubiesen iniciado con anterioridad al doce de julio de dos mil veintiuno."

La salvedad prevista en la base tercera, no impide a la suscrita autoridad consultar presencialmente los expedientes respectivos y presentar demandas, recursos, incidentes y, en general, cualquier promoción por escrito en el formato tradicional o a través de los Sistemas Electrónicos de la SCJN y del PJP, siempre y cuando se haga por conducto de quienes cuenten con la capacidad procesal necesaria.

Con base en lo expuesto, respetuosamente se solicita a ese H. Órgano Jurisdiccional que las subsecuentes notificaciones, consultas y promociones en el juicio en que se actúa, se realicen a través de la Interconexión, en los términos del citado Convenio y Declaratoria, por lo que, a partir del proveído que acuerde favorablemente esta solicitud, la notificación que recaída a esta solicitud y las subsecuentes actuaciones deberán realizarse a través de dicho medio.

#### **DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES**

No obstante lo anterior, **para el caso de que ese H. Órgano Jurisdiccional, determine no acordar favorablemente la solicitud de realizar las subsecuentes notificaciones a través de la interconexión**, la suscrita autoridad responsable, señala como domicilio para recibir notificaciones, las oficinas de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ubicadas en **Avenida Insurgentes Sur Número 795, Nápoles, Benito Juárez, Código Postal 03810, en la Ciudad de México.**

#### **PRECEDENTES JUDICIALES**

I.- En relación con el oficio **411-2/0749/2022 de fecha 30 de septiembre de 2023**, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que pretende controvertir la quejosa, no constituye un acto reclamado, conforme a los siguientes criterios.

Es importante destacar, que diversos Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados han determinado que **NO EXISTE ACTO DE APLICACIÓN**, respecto al artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, derivado de los **"REQUERIMIENTOS DE PRESENTACIÓN DE PAGO Y/O ACLARACIÓN"**, efectuados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de la inspección y vigilancia que prestan en relación con las obligaciones establecidas en el diverso artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, por las siguientes consideraciones:

- El oficio reclamado, denominado "requerimiento de pago", **constituye sólo un instrumento preventivo mediante el cual se informa a la quejosa las cuotas a cuyo pago está sujeta por los servicios de inspección y vigilancia que realiza la CNBV**, por lo tanto, en el referido

oficio se convoca a la quejosa a regularizarse, sin que se advierta que se establece sanción alguna en su contra ni menos aún la aplicación del artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos.

- El oficio de referencia, **sólo se trata de una "invitación" o propuesta de pago, y no así, de una resolución que determine una obligación o crédito fiscal a cargo del particular**, ni una condicionante de pago a este, ya que tal circunstancia acontecerá cuando la fiscalizadora ejerza sus facultades de comprobación, y como consecuencia de ello emita una determinación (crédito fiscal a cargo del gobernado).
- Los oficios impugnados, son un acto declarativo, a través del cual, la autoridad **EXHORTA** al contribuyente a corregir su situación respecto de las omisiones detectadas, con lo que no se ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida que a través de este acto la autoridad **exclusivamente señala diversas cantidades liquidas que obran en sus registros** y que sólo tendrá en cuenta cuando la autoridad competente, ejerza sus facultades de comprobación, y en consecuencia emita una resolución en la que se establezcan obligaciones para el contribuyente fiscalizado, es decir, en los oficios impugnados, la autoridad solamente se limita a dar noticia de la existencia de presuntos adeudos.

ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. JUZGADOS DE DISTRITO			
1563/2014	Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutierrez.	<b>SOBRESEE</b> (Art. 61, fracción XII "Falta de acto de aplicación").	CAUSO ESTADO LA SENTENCIA QUE SOBRESEE.
1797/2014	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida.	<b>SOBRESEE</b> (Art. 61, fracción XII "Falta de acto de aplicación").	CAUSO ESTADO LA SENTENCIA QUE SOBRESEE.
1540/2014	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida.	<b>SOBRESEE</b> (Art. 61, fracción XII "Falta de acto de aplicación").	CAUSO ESTADO LA SENTENCIA QUE SOBRESEE.





1764/2014	Juzgado Quinto de Distrito en El Estado de Yucatán, con residencia en Mérida.	<b>SOBRESEE</b> (Art. 61, fracción XII “Falta de acto de aplicación”).	CAUSO ESTADO LA SENTENCIA QUE SOBRESEE.	
2527/2014	Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.	<b>SOBRESEE</b> (Art. 61, fracción XII “Falta de acto de aplicación”).	CAUSO ESTADO LA SENTENCIA QUE SOBRESEE.	
43/2016	Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con Residencia en Mexicali.	<b>SOBRESEE</b> (Art. 61, fracción XII “Falta de acto de aplicación”).	CAUSO ESTADO LA SENTENCIA QUE SOBRESEE.	
<b>ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.</b> <b>TRIBUNALES COLEGIADOS</b>				
JUICIO DE AMPARO	JUZGADO DE ORIGEN/JUZGADO AUXILIAR	SENTENCIA SOBRESEE.	TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.	EJECUTORIA
2271/2014	Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco con Residencia en Zapopan.	<b>SOBRESEE</b> (Art. 61, fracción XII “Falta de acto de aplicación”).	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Tercer Circuito, en el Estado de Jalisco.  A.R. 263/2015	<b>CONFIRMA.</b>
471/2015	Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco con Residencia en Zapopan.	<b>SOBRESEE</b> (Art. 61, fracción XII “Falta de acto de aplicación”).	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Tercer Circuito, en el Estado de Jalisco.  AR. 5/2016	<b>CONFIRMA.</b>

Una vez expuesto lo anterior, se hacen valer las siguientes:

## CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

### **PRIMERA. PROCEDE SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO RESPECTO A LOS ACTOS RECLAMADOS QUE NO SON CIERTOS, ATENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.**

En efecto, procede sobreseer el juicio de amparo respecto de los actos reclamados que resultan no ciertos, atribuidos a la suscrita autoridad, en virtud de que no hay materia sobre la cual pudiese realizar un estudio ese H. Juzgado de Amparo respecto de los actos reclamados.

Lo anterior es así, en razón de que la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, establece:

**"Artículo 63.** El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

(...)

**IV.** De las constancias de autos apareciera claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y

(...)"

**(Énfasis añadido)**

Como puede apreciarse del artículo antes transcrito, el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando: 1) de las constancias quede claramente demostrado la inexistencia del acto, y 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.

Supuestos que se actualizan en el presente asunto, en virtud de que la quejosa no exhibió documento alguno que demostrara lo contrario, resulta aplicable la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete, del Tomo IV Segunda Parte-2, del Apéndice de Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, que si bien es cierto aborda el estudio de la negativa de los actos con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, también lo es que analiza la hipótesis jurídica que se hace valer mediante el presente motivo de sobreseimiento, y que es del tenor literal siguiente:

#### **"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS.**

Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo."

Así como la tesis aislada XXI. 1o. 102 K, con registro 210529, Octava Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, septiembre de 1994, que a continuación se transcribe:

#### **"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.**

Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."

Por igual que la jurisprudencia VI.2o.J/18 con número de registro 803111, visible en la página ciento y cincuenta y cuatro, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación julio-septiembre de 1989, núm. 19-21, que dice:

**“ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL.** Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo.”

En conclusión, es procedente el sobreseimiento del presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, ya que el quejoso en su escrito inicial de demanda nunca aportó prueba alguna que desvirtuó la negativa manifestada en el presente informe.

En virtud de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia que se hace valer, lo procedente es que se sobresea el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a lo establecido en artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.

**SEGUNDA. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS QUE NOS OCUPA, CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA QUEJOSA NO DEMUESTRA CON PRUEBA FEHACIENTE QUE EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LE HAYAN SIDO APLICADOS Y POR TANTO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO.**

De acuerdo con los principios rectores del juicio de amparo, éste sólo puede promoverse a instancia de parte agraviada, es decir, resulta procedente ante la existencia de una lesión a un interés tutelado por el ordenamiento legal, de ahí que el artículo 6º, de la Ley de Amparo contempla para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos públicos subjetivos, en su persona o en su patrimonio, intereses que deben ser demostrados y ofrecer prueba idónea para poder instar la acción constitucional.

En tal virtud, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que **el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones;** de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados o bien, como en el caso que estos no sean demostrables.

Ello es así, ya que la parte quejosa, no acredita en primera instancia la lesión de un interés jurídicamente tutelado, pues no acredita con prueba fehaciente en la cual se demuestre la aplicación del artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, pues la parte quejosa no aporta prueba alguna en la cual se demuestre de forma fehaciente el perjuicio que dice resentir en su demanda de amparo, es decir, la impetrante de amparo no aporta al juicio de amparo en que se actúa, probanza alguna **con la cual demuestre la aplicación de dichos dispositivos reclamados.**

Pues no basta que la parte quejosa, simplemente señale en su demanda de amparo que se le aplicó el precepto reclamado, si no que, en el caso, **debe demostrar de forma fehaciente que se le aplicó el artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos**, situación que en caso no sucede.

En otras palabras, la quejosa no demuestra su interés jurídico, dentro de su esfera jurídica o bien legalmente tutelado, respecto de la aplicación del artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, ya **QUE NO ACREDITA CON DOCUMENTO ALGUNO LA APLICACIÓN DE DICHS PRECEPTOS** para entonces poder dolerse de dicho numeral, **sin ofrecer prueba fehaciente alguna de su parte, de lo cual se advierte que el precepto reclamado le haya sido efectivamente aplicado.**

Tiene apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia, Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 191, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 109-114 Primera Parte, Séptima Época, que a la letra dice:

***"INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL.*** Los sujetos que se consideren afectados por la ley que se impugna de inconstitucional, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, combatiéndola por esa causa, deben demostrar que están bajo los supuestos de la ley. La comprobación se puede hacer por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes; ***y si no existe ninguna que demuestre que los quejosos estén bajo los supuestos de la ley, debe sobreseerse el juicio de amparo.***"

Al efecto, es igualmente aplicable la Tesis de Jurisprudencia visible a fojas 155, del Informe de Labores de 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, del tenor literal siguiente:

***"INTERÉS JURÍDICO. QUE LO CONSTITUYE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.-*** El artículo 4 de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es la que provoca la génesis de la acción constitucional. Así como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivo, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, ***teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse en base en presunciones;*** de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o los reclamados es la que determina el perjuicio a la afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de un agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legales amparados."  
***(Énfasis añadido)***

En atención a las tesis transcritas, toda vez que la quejosa no aportó prueba alguna para demostrar el acto de aplicación, carece de interés jurídico para acudir a la presente instancia.

Además, como lo señala la Ley de Amparo, es la parte quejosa, quien debe demostrar que los ordenamientos recurridos afectan **su interés jurídico**; y si este interés como en el caso ocurre, **no queda demostrado, resulta legal el sobreseimiento sin que baste para el caso la simple mención**

**de la quejosa del artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos**, pues dichas afirmaciones para poder ser tomadas en cuenta deben necesariamente estar respaldadas, con los medios de prueba establecidos por la ley, situación que la quejosa no demuestra en el presente juicio de amparo en que se actúa.

En este contexto tal y como se desprende de la lectura de la demanda de amparo, la parte quejosa no acredita por ningún medio de convicción, que los preceptos impugnados violenten sus derechos como gobernado, por lo que para que el juicio de garantías prospere, es necesario que la parte quejosa acredite dicha afectación, por tanto, si no se demuestra en forma fehaciente el interés jurídico, resulta procedente se decrete el sobreseimiento.

Atento a lo anterior, en razón de que el quejoso **no demuestra con prueba fehaciente alguna afectación derivada de la supuesta aplicación de la norma impugnada, pues, no basta el simple dicho de la quejosa respecto del acto de aplicación, sino que, es necesario que lo acredite a través de los medios probatorios idóneos,** lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, resultando aplicable al presente asunto, la tesis XX. J/14, visible en la página 160, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: III, enero de 1996, Novena Época que consigna lo siguiente:

**“INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL.** En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones.”

En este mismo sentido, la tesis 2aJ/. 16/94, visible en la página 17, del: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 82, octubre de 1994, Octava Época del tenor literal siguiente:

**“INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.** En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.”

Resulta aplicable la tesis prevista en la página 379 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-II febrero, Tesis II.2o.C.T.5 1 Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito en la que se expresa que:

**“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.** La existencia del acto reclamado no exime a la quejosa de la obligación que tiene de acreditar que se afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo, el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los artículos 73, fracción y 74, fracción II, de la Ley de Amparo.”

Asimismo, tiene apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia, Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 191, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 109-114 Primera Parte, Séptima Época, que a la letra dice:

**“INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL.** Los sujetos que se consideren afectados por la ley que se impugna de inconstitucional, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, combatiéndola por esa causa, deben demostrar que están bajo los supuestos de la ley. La comprobación se puede hacer por



cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes; **y si no existe ninguna que demuestre que los quejosos estén bajo los supuestos de la ley, debe sobrepasar el juicio de amparo.**"

Al efecto, es igualmente aplicable la Tesis de Jurisprudencia visible a fojas 155, del Informe de Labores de 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, del tenor literal siguiente:

**"INTERÉS JURÍDICO. QUE LO CONSTITUYE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.-** El artículo 4 de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es la que provoca la génesis de la acción constitucional. Así como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivo, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, **teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse en base en presunciones;** de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o los reclamados es la que determina el perjuicio a la afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de un agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legales amparados."  
**(Énfasis añadido)**

Asimismo, sirve de apoyo a lo antes expuesto la Tesis visible en la página 46, en la parte correspondiente al Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente señala:

**"INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.-** De acuerdo con el sistema consignado en la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de **la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley.** Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. **Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecer el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas.**"

De los criterios citados se desprende que en el juicio de amparo se debe acreditar de manera fehaciente tanto el interés jurídico como la afectación, mismas que no pueden inferirse con base en presunciones.

Lo anterior, en virtud de que el interés jurídico es uno de los elementos de procedencia del amparo, en el entendido de que dicho interés es la afectación de los derechos públicos subjetivos del particular que le ocasiona un perjuicio personal y directo, de modo que sólo puede tener los efectos precisados la norma en cuyo supuesto se encuentra ubicada la parte quejosa.

Con base en los argumentos antes vertidos, se desprende que la parte quejosa carece de interés jurídico para intentar la promoción del juicio de garantías que nos ocupa, toda vez que reclama de la suscrita autoridad, la afectación o menoscabo del derecho que dice tener, sin que acredite el interés jurídico y por tanto el derecho subjetivo tutelado que alega violado.

Debe considerarse que resulta necesario que la quejosa demuestre que acto de aplicación, así como, que el mismo le causa un perjuicio, así bien, corresponde a la parte quejosa demostrar tal situación, y no basarse en meras presunciones.

Resulta aplicable, la tesis X.3º.5K, visible en la página 555, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IX, abril de 1999, Novena Época del tenor literal siguiente:

**"INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. NO BASTA LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL QUEJOSO HAYA SIDO PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO.** El hecho de que el quejoso haya sido parte en el procedimiento del que procede la aprobación del remate reclamado, no basta por sí solo para acreditar el interés jurídico, porque a lo sumo implica sólo una presunción insuficiente para tal fin, desde luego si se entiende que el interés jurídico no debe inferirse a base de presunciones sino acreditarse fehacientemente."

En atención a los criterios transcritos, toda vez que la quejosa no aportó prueba alguna para demostrar el acto de aplicación, carece de interés jurídico para acudir a la presente instancia.

En ese orden de ideas, y al no haberse acreditado de manera fehaciente e indubitable, por parte de la impetrante de garantías, que el artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, le causan un perjuicio en su esfera jurídica, **PROCEDE SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.**

**TERCERO. PROCEDE SOBRESEER EL JUICIO DE AMPARO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN XIV, EN RELACIÓN CON EL 63, FRACCIÓN V, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO CONSINTIÓ TÁCITAMENTE EL ARTÍCULO QUE RECLAMA.**

El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece lo siguiente:

**"Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente:

(...)

**XIV.** Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.

(...)

Por su parte, el artículo 17, párrafo primero y fracción I, de la Ley de Amparo vigente establece el término para la promoción del juicio de amparo:

**"Artículo 17.** El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;

(...)"

De una interpretación armónica de los preceptos anteriores, podemos determinar que las normas jurídicas pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, según sea su naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas).

En el primer caso, basta que el particular se encuentre ubicado en los supuestos de la norma que afecte su interés jurídico para interponer el juicio de amparo en el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la ley.

En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y entonces, el término para promover el juicio de amparo será de quince días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo vigente.

Por ello, para la impugnación de leyes a través del juicio de amparo debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica del quejoso, ya sea porque a la entrada en vigor de estas produzca sus efectos, o porque dichos efectos se hayan producido por la actuación de la autoridad o tratándose de actos del propio particular, que lo vincule con la ley al actualizarse los supuestos de previstos en la misma.

Luego entonces, **en el caso de que el juicio de amparo en contra de leyes no sea promovido en los plazos previstos por el artículo 17, primer párrafo y fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es decir a partir de su entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, el juicio de garantías será improcedente.**

Lo anterior, toda vez que tratándose de leyes heteroaplicativas, **es el primer acto de aplicación de la ley**, el que permite o posibilita jurídicamente la impugnación de una ley por estimarse constitucional.

Ahora bien, en el juicio de amparo que nos ocupa, la quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo que combate, **es decir, el artículo 29-E de la Ley Federal de Derechos**, por **el pago que realizó de las cuotas anuales y mensuales a las entidades financieras por concepto de servicios de inspección y vigilancia que presta la CNBV. únicamente por considerarse que es una persona moral constituida bajo el régimen de "Sociedad Anónima de Capital Variable. Sociedad Financiera de objeto Múltiple. Entidad No Regulada". sin requerimiento de pago realizado por parte de la autoridad Competente.**

Al respecto la parte quejosa señaló como acto de aplicación, el pago que realizó por concepto de servicios de inspección y vigilancia, sin que la autoridad emitiera algún oficio en donde se le requiriera el pago por dichos conceptos.

Así, al haberse interpuesto la presente demanda, con motivo de un pago que la quejosa unilateralmente decidió realizar –por mera presunción- por concepto de servicios de inspección y vigilancia, sin un acto de autoridad, es decir, sin algún requerimiento por parte de la autoridad competente, se entiende que la quejosa consintió tácitamente el acto, pues la quejosa consideró que debía cubrir dicho monto al encuadrarse en la hipótesis normativa que reclama.

Lo anterior, ha sido sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la tesis visible bajo el registro 257, 866, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Primera Parte, LXXXII, cuyo rubro y texto establecen:

**"AMPARO CONTRA LEYES. ACTOS CONSENTIDOS.** De conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, **es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiendo por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término legal;** y el mencionado párrafo segundo de dicha fracción, dispone que no se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnabile en amparo desde el momento de su promulgación, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya interpuesto contra el primer acto de aplicación en relación con el quejoso. Ahora bien, si se tiene conocimiento por las notificaciones que se le hacen a una persona de los actos de aplicación de una Ley de Expropiación, consistentes en el acuerdo de iniciación del procedimiento y en la orden para la ocupación temporal del inmueble, es indudable que se consintió dicha ley si no se hace la impugnación dentro del término legal. No siendo óbice a lo anterior, que se haya promovido juicio de amparo y que en él se le haya concedido la protección federal, respecto de la orden de desocupación temporal, si en esa ocupación no se reclamó la inconstitucionalidad de la Ley de Expropiación."

**(Énfasis añadido)**

En apoyo a lo anterior, también resultan aplicables al respecto las jurisprudencias números 60 y 61, visibles en las páginas 101 a 103, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, correspondiente a Salas y Tesis Comunes, que expresan:

**"ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.** Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo."

**"ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.-** Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala."

**Sin que resulte aplicable suplir la deficiencia de la queja respecto de la ley**, por el hecho de que exista jurisprudencia de la SCJN que declare su inconstitucionalidad, toda vez que **no deben soslayarse las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías**; ya que **la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio.**

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P. /J. 7/2006, de la Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Común, que establece lo siguiente:

**"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.** De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, **el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución.** Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, **aquella podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio.** pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo."

**(Énfasis añadido)**

Por lo que resulta evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa **ha consentido tácitamente el acto reclamado.**

#### **NEGATIVA DE AMPARO.**

**PRIMERA. RESULTA INFUNDADO EL ARGUMENTO DEL QUEJOSO AL SEÑALAR QUE ES INCONSTITUCIONAL EL COBRO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29-E FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS YA QUE NO SE TRATA DE UNA AUTÉNTICA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DEL ESTADO, SINO DE UNA OBLIGACIÓN QUE DEBE LLEVAR A CABO.**

En efecto, contrario a lo afirmado por la *quejosa*, la supervisión que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contempla el artículo 95 Bis, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, **sí es un servicio público que presta el Estado,** por lo siguiente:

#### **A) CONDUCTA DEL ESTADO INVESTIDO DE IMPERIO**

El cobro de derecho contemplado en el precepto que impugna la quejosa surge de una relación en la que el Estado actúa investido de imperio, ya que el deber de contribuir deriva exactamente de los artículos 31, fracción IV, Constitucional, 3º de la Ley Federal de Derechos y 18 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que establece que las instituciones financieras que se encuentren sujetas a la supervisión por parte de la Comisión deben cubrir los derechos correspondientes.

**"Artículo 30.-** Las personas físicas y las morales pagarán los derechos que se establecen en esta Ley en las oficinas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El pago de los derechos que establece esta Ley deberá hacerse por el contribuyente previamente a la prestación de los servicios o previo al uso, goce, explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, salvo los casos en que expresamente se señale que sea posterior.



(...)

**Artículo 18.-** Las entidades del sector financiero y sociedades emisoras, así como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, y el fondo de protección a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; las federaciones y el fondo de protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular; así como las demás personas físicas o morales, sujetas conforme a esta y otras Leyes a la supervisión de la Comisión, **deberán cubrir los derechos correspondientes en los términos de las disposiciones legales aplicables.**

Los derechos a que se refiere este artículo se destinarán a cubrir el presupuesto de la Comisión.

Si al finalizar el ejercicio presupuestal, existiera saldo proveniente de los ingresos por concepto de derechos, el Presidente transferirá la parte no comprometida del presupuesto a una reserva especial, la que será destinada a la cobertura de gastos correspondientes a posteriores ejercicios.

(...)"

Siendo importante destacar que el sistema financiero desempeña un papel central en el funcionamiento y desarrollo de la economía de nuestro país, siendo el objeto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores "supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esta ley señala, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, **en protección de los intereses del público.**"<sup>[1]</sup>

Por lo tanto, la supervisión que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para inspeccionar y vigilar que los centros cambiarios, transmisores de dinero o sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOM E.N.R.) cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, así como realizar observaciones y formular recomendaciones, sí constituye un servicio de carácter público conforme a la teoría jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que **se presta con motivo de las funciones públicas estatales orientadas al control y regulación de ciertas actividades auxiliares de crédito, para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que dicho servicio reúne la cualidad de ser particular o divisible.**

Resulta aplicable al caso concreto, en lo conducente, la tesis aislada 2a. CCX/2002 sustentada en la Novena Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, enero de 2003, página 727 y que es del tenor literal siguiente:

**"DERECHOS POR SERVICIOS. PARA DETERMINAR SI TIENEN ESA NATURALEZA LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES CUYA OBLIGACIÓN DE PAGO ESTÁ VINCULADA CON UN DETERMINADO ACTO DEL ESTADO, ES NECESARIO ANALIZAR LA RELACIÓN**

<sup>[1]</sup> Artículo 2º de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el DOF el 09 de abril de 2012.



**JURÍDICA AL SENO DE LA CUAL SURGE LA REFERIDA OBLIGACIÓN.** *El hecho de que la obligación de pago de las prestaciones patrimoniales nazca para los gobernados con motivo de la realización de un determinado acto por parte de un órgano del Estado, consistente en una actividad divisible, individualizada y susceptible de medición, no basta para estimar que se trata de contribuciones, en su especie derecho por servicios, cuyo establecimiento, liquidación y cobro se rige por los principios de justicia tributaria garantizados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es necesario analizar cuál es la naturaleza de la relación jurídica que subyace a esa obligación de pago, ya que dependiendo de la índole de las atribuciones que desarrolla el respectivo órgano estatal al realizar la conducta que debe retribuirse, se podrá advertir si ésta surge dentro de un vínculo en el que el Estado acude investido de imperio y, por tanto, la prestación correspondiente constituye un derecho por servicio, o bien, si tiene su origen en una relación de coordinación que se da entre el respectivo órgano estatal y los gobernados y, por ende, se trata de un producto, con el cual se retribuyen los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado y en cuya obtención prevalece la voluntad de las partes.*

## **B) ACTIVIDAD ESTATAL INDIVIDUALIZADA, CONCRETA Y DETERMINADA.**

Las instituciones financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero o sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOM E.N.R.) provocan su prestación al llevar a cabo operaciones con diversos instrumentos monetarios (hasta cierto monto) por lo que requieren de la verificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo tanto, constituye una actividad estatal individualizada, concreta, determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre el Estado y dichos sujetos.

De conformidad con los **artículos 4º, 43, 49 y 50 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, dicha actividad individualizada, concreta y determinada implica:

- a) INSPECCIÓN.** A través de visitas de verificación de operaciones y auditorías de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las personas supervisadas, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.
- b) VIGILANCIA.** A través del análisis de información contable, legal, económica, financiera, administrativa de procesos y procedimientos que obtenga la aludida Comisión con base a las disposiciones que resulten aplicables, con la finalidad de evaluar el apego a la normatividad que rige a las personas supervisadas, así como su estabilidad y correcto funcionamiento. La mencionada facultad también podrá realizarse a través de muestras representativas y aleatorias de la documentación e información proporcionada.
- c) OBSERVACIONES Y FORMULAR RECOMENDACIONES.** Además la Comisión se encuentra facultada para realizar observaciones cuando en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, detecte elementos de los que puedan derivarse hechos, actos u omisiones que impliquen el probable incumplimiento de las disposiciones aplicables o de las sanas públicas de los mercados financieros; así como formular recomendaciones para que aquéllas mejoren su sistema de control o procesos, mediante oficio debidamente fundado y motivado.

De esta manera, las instituciones financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero o sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOM E.N.R.) son los beneficiarios inmediatos de los



servicios proporcionados, ya que en la medida que se constate que cumplen con las exigencias del citado artículo 95 Bis, **podrán seguir contando con su registro para llevar a cabo las transferencias financieras que tienen autorizadas ese tipo de entidades, de tal modo que reciben un beneficio distinto del que les correspondería por el sólo hecho de ser miembros de la colectividad,** surtiéndose así la causa jurídica del pago del derecho de vigilancia.

Resulta aplicable al caso en concreto la jurisprudencia P./J. 41/96. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996, Pág. 17, cuyo rubro y texto es el siguiente:

**"DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA.**

Las características de los derechos tributarios que actualmente prevalecen en la jurisprudencia de este alto tribunal encuentran sus orígenes, según revela un análisis histórico de los precedentes sentados sobre la materia, en la distinción establecida entre derechos e impuestos conforme al artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos treinta y ocho, y su similar del Código del año de mil novecientos sesenta y siete, a partir de la cual se consideró que la causa generadora de los derechos no residía en la obligación general de contribuir al gasto público, sino en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras o servicios ("COOPERACIÓN, NATURALEZA DE LA.", jurisprudencia 33 del Apéndice de 1975, 1a. Parte; A.R. 7228/57 Eduardo Arochi Serrano; A.R. 5318/64 Catalina Ensástegui Vda. de la O.; A.R. 4183/59 María Teresa Chávez Campomanes y coags.). Este criterio, sentado originalmente a propósito de los derechos de cooperación (que entonces se entendían como una subespecie incluida en el rubro general de derechos), se desarrollaría más adelante con motivo del análisis de otros ejemplos de derechos, en el sentido de que le eran inaplicables los principios de proporcionalidad y equidad en su concepción clásica elaborada para analizar a los impuestos, y que los mismos implicaban en materia de derechos que existiera una razonable relación entre su cuantía y el costo general y/o específico del servicio prestado ("DERECHOS POR EXPEDICION, TRASPASO, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS MERCANTILES, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 14, FRACCIONES I, INCISO C), II, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL AÑO DE 1962, QUE FIJA EL MONTO DE ESOS DERECHOS CON BASE EN EL CAPITAL EN GIRO DE LOS CAUSANTES, Y NO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS PARTICULARES", Vol. CXIV, 6a. Época, Primera Parte; "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS", Vol. 169 a 174, 7a. Época, Primera Parte; "AGUA POTABLE, SERVICIO MARITIMO DE. EL ARTICULO 201, FRACCION I, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADO POR DECRETO DE 26 DE DICIEMBRE DE 1967, QUE AUMENTO LA CUOTA DEL DERECHO DE 2 A 4 PESOS EL METRO CUBICO DE AGUA POTABLE EN EL SERVICIO MARITIMO, ES PROPORCIONAL Y EQUITATIVO; Y POR LO TANTO NO ES EXORBITANTE O RUINOSO EL DERECHO QUE SE PAGA POR DICHO SERVICIO", Informe de 1971, Primera Parte, pág. 261). El criterio sentado en estos términos, según el cual los principios constitucionales tributarios debían interpretarse de acuerdo con la naturaleza del hecho generador de los derechos, no se modificó a pesar de que el artículo 2o., fracción III del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos ochenta y uno abandonó la noción de contraprestación para definir a los derechos como "las contribuciones establecidas por la prestación de un servicio prestado por el Estado en su carácter de persona de derecho público, así como por





el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público" (A.R. 7233/85 Mexicana del Cobre, S.A. y A.R. 202/91 Comercial Mabe, S.A.). De acuerdo con las ideas anteriores avaladas por un gran sector de la doctrina clásica tanto nacional como internacional, puede afirmarse que los derechos por servicios son una especie del género contribuciones que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente **se conoce como una actividad de la Administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la Administración y el usuario, que justifica el pago del tributo.**

De aceptar lo contrario, las multitudes organizaciones financieras se podrían ver involucradas en actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer para la comisión de ciertos ilícitos; por tanto, ese servicio público que otorga el Estado con la finalidad de supervisar el buen funcionamiento, trae como beneficio el simple cumplimiento legal de la supervisión especial que requieren, y que obliga al Estado a desplegar su actividad en forma particularizada, y por ello, sí procede el cobro de una contraprestación con base al costo del servicio.

Apoyó su conclusión en las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de rubros: "DERECHOS DE VIGILANCIA. LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTÍMULOS FISCALES TIENEN EL CARÁCTER DE CONTRIBUCIONES" y "DERECHOS DE VIGILANCIA. LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTÍMULOS FISCALES DERIVAN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO".

En conclusión, el argumento de la quejosa resulta infundado, siendo procedente negarle el amparo y protección de la justicia de la unión a la quejosa.

**SEGUNDA. RESULTA INFUNDADO EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN VERTIDO POR LA QUEJOSA, YA QUE AL TRATARSE DE UN SERVICIO QUE PRESTA EL ESTADO EN SUS FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO ENCUENTRA PLENA JUSTIFICACIÓN EL COBRO REALIZADO, POR LO CUAL NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA A QUE REFIERE.**

Señala la quejosa que, la actividad de supervisión que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es una facultad potestativa no imperativa, por lo que resulta discrecional el ejercicio o no de esa facultad supervisora contra las sociedades financieras de objeto múltiple no regulada, por lo que el importe del derecho previsto en el artículo 29-E, fracción VII, no puede considerarse una contraprestación por un servicio de supervisión, pues tal facultad no constituye un servicio público, sino una facultad discrecional.

Resulta infundado el concepto de violación vertido por la quejosa, ya que el servicio que presta el Estado a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contenido en el artículo 29-E fracción VII de la Ley Federal de Derechos, para **la inspección y vigilancia de las operaciones que realizan las sociedades morales ahí contenidas, encuentra plena justificación al tratarse de un servicio que presta el Estado en sus funciones de derecho público.**

El artículo 29-E fracción VII de la Ley Federal de Derechos dispone que se cobrará el derecho por los servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el caso en específico, a los centros cambiarios, a efecto de verificar el cumplimiento de las disposiciones



establecidas en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Por su parte el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, señala lo siguiente:

**"Artículo 95 Bis.- Las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después de escuchar la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligados, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:**

**"I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código;"**

**(...)"**

Del precepto transcrito resulta evidente que el Estado, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está facultado para inspeccionar y vigilar a los centros cambiarios en lo concerniente al cumplimiento de las normas para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como su utilización en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en territorio nacional o en el extranjero. (Artículos 139, 148 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal)

Situación que incluso fue prevista por el legislador en el respectivo dictamen que dio origen a la reforma de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de agosto de 2011, que expresa lo siguiente:

"En ese sentido la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito se integra bajo los siguientes aspectos:

**I. De las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.**

**(...)**

**Asimismo, se establece la facultad de la referida Comisión para supervisar a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, exclusivamente en lo concerniente al cumplimiento de las normas para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita establecidas en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y en las Disposiciones concernientes a dicha materia que de esta emanen."**

Por tanto, contrariamente a lo que sostiene la parte quejosa, la inspección y vigilancia que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sí constituye un servicio susceptible de ser cobrado, ya que es prestado por el Estado en sus funciones de derecho público, debido a que los servicios que prestan los centros cambiarios, constituyen una actividad de interés público que el Estado debe proteger y vigilar para el debido cumplimiento de su función social; máxime que con tal actividad el



Estado busca prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita o su utilización en apoyo a organizaciones delictivas, dentro del territorio nacional o en el extranjero.

Resulta aplicable al caso concreto, en lo conducente, la tesis aislada 2a. CCX/2002 sustentada en la novena época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, enero de 2003, página 727 y que es del tenor literal siguiente:

**"DERECHOS POR SERVICIOS. PARA DETERMINAR SI TIENEN ESA NATURALEZA LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES CUYA OBLIGACIÓN DE PAGO ESTÁ VINCULADA CON UN DETERMINADO ACTO DEL ESTADO, ES NECESARIO ANALIZAR LA RELACIÓN JURÍDICA AL SENO DE LA CUAL SURGE LA REFERIDA OBLIGACIÓN.** El hecho de que la obligación de pago de las prestaciones patrimoniales nazca para los gobernados con motivo de la realización de un determinado acto por parte de un órgano del Estado, consistente en una actividad divisible, individualizada y susceptible de medición, no basta para estimar que se trata de contribuciones, en su especie derecho por servicios, cuyo establecimiento, liquidación y cobro se rige por los principios de justicia tributaria garantizados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es necesario analizar cuál es la naturaleza de la relación jurídica que subyace a esa obligación de pago, ya que dependiendo de la índole de las atribuciones que desarrolla el respectivo órgano estatal al realizar la conducta que debe retribuirse, se podrá advertir si ésta surge dentro de un vínculo en el que el Estado acude investido de imperio y, por tanto, la prestación correspondiente constituye un derecho por servicio, o bien, si tiene su origen en una relación de coordinación que se da entre el respectivo órgano estatal y los gobernados y, por ende, se trata de un producto, con el cual se retribuyen los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado y en cuya obtención prevalece la voluntad de las partes."

Por tanto, la relación jurídica que subyace a la obligación de pago por el servicio de inspección y vigilancia prestados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, surge a partir de las atribuciones que dicho órgano desarrolla dentro de un vínculo en el que este acude investido de imperio; y no de la prestación correspondiente en sus funciones de derecho privado, cuya realización se encuentra subordinada a la voluntad de las partes, de ahí la justificación de su cobro.

Ahora bien, anteriormente el Servicio de Administración Tributaria contaba con facultades reducidas para la supervisión de los centros cambiarios, lo que impedía un adecuado control en el manejo de los recursos financieros.

Sin embargo el Legislador a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto del año 2011 expresó en la exposición de motivos que sería la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el órgano gubernamental facultado para llevar a cabo la prestación del servicio de inspección y vigilancia de las sociedad **que pertenezca al sector de centros cambiarios, transmisores de dinero o sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas** a que se refiere la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

En efecto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público manifestó en el proyecto de decreto lo siguiente:

“(…)

Sin embargo, esta Comisión dictaminadora con el propósito de lograr mayor claridad en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, estima necesario llevar a cabo adecuaciones integrales a la citada Ley, es por ello que el presente proyecto que incluye la reforma del artículo 95 Bis que nos ocupa, busca adecuar la regulación aplicable a las actividades auxiliares del crédito que se realizan con fundamento en el artículo 81-A de la Ley en comento, las cuales se realizan a través de los denominados coloquialmente como centros cambiarios, así como a los transmisores de dinero.

En ese sentido la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito se integra bajo los siguientes aspectos:

I. De las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Se establece la facultad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de llevar a cabo la inspección y vigilancia de los centros cambiarios y transmisores de dinero, en lugar del Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior, con el fin de contar con un organismo supervisor centralizado y con mayores funciones, que permitan un adecuado control y una supervisión más eficaz de las citadas actividades auxiliares del crédito, principalmente de aquellas personas que se mantienen al margen de la Ley en la realización de operaciones de cambio de divisas y en el envío y recepción de dinero, principalmente remesas, cuya existencia pone en seria desventaja al mercado formal. Lo anterior, se traducirá en beneficios para todas aquellas personas que, al desarrollar este tipo de actividades, cumplen en estricto apego a lo establecido en la Ley.

Asimismo, se establece la facultad de la referida Comisión para supervisar a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, exclusivamente en lo concerniente al cumplimiento de las normas para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita establecidas en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y en las Disposiciones concernientes a dicha materia que de esta emanen.

“(…)”

De la transcripción anterior, se puede advertir que el legislador determinó dotar de facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para llevar a cabo la inspección y vigilancia los centros cambiarios, transmisores de dinero o sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, en lugar del Servicio de Administración Tributaria, con el fin de contar con un organismo supervisor centralizado y con mayores funciones, que permitan un adecuado control y una supervisión más eficaz a las citadas sociedades, para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita establecidas en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y en las Disposiciones concernientes a dicha materia que de esta emanen.

En esta tesitura y con base en las consideraciones anotadas, podemos concluir que el Derecho previsto en el artículo 29-E fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, por los servicios de inspección y vigilancia que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encuentra plena justificación, al tratarse de una actividad realizada por el Estado, en sus funciones de derecho público, cuyo objetivo es **garantizar la seguridad pública, por lo cual de forma alguna viola el derecho de seguridad jurídica a que se refiere la quejosa.**

**TERCERA. DEBE NEGARSE EL AMPARO A LA QUEJOSA YA QUE EL ARTÍCULO 29-E FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.**

En efecto el artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria en materia de derechos, en la inteligencia de tomar en cuenta el costo que representa al estado proporcionar los servicios de inspección y vigilancia que presta a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En este sentido cabe señalar que el artículo 2, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación define que los derechos son contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como **por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público,** excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos.

De lo anterior se desprende que un derecho debe responder a tres principios básicos:

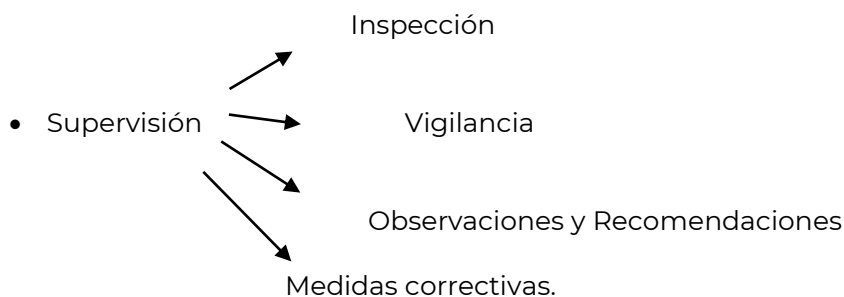
- a) Ser una conducta por parte del Estado, o a través de un órgano desconcentrado por el mismo.
- b) Realizarse a través de actuaciones individualizadas; y
- c) Que estas sean concretas y determinadas.

Es aplicable al caso en concreto la Jurisprudencia P/J. 1/98 de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en Enero de 1998 Tomo VII, pag. 40 el cual establece lo siguiente:

**"DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN.** Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro

debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos".

Es importante señalar que de conformidad con el artículo 1º del Reglamento de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se establece con meridiana claridad el objeto por el que fue creada dicha Comisión, entre las que se encuentra regular lo siguiente:



Por lo anterior, es claro que la supervisión efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, requiere de varios despliegues por parte de la autoridad, la cual lleva a cabo mediante visitas de inspección o vigilancia, haciendo un análisis de muestras representativas y de manera aleatoria respecto de la información, documentación, sistemas o equipos de las entidades inspeccionadas, entre los que se encuentran las entidades financieras, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las Leyes relativas al sistema financiero, las cuales pueden ser verificadas exclusivamente para constatar el cumplimiento de los preceptos a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para posteriormente emitir una serie de observaciones o recomendaciones que en caso de incumplimiento pueden recaer en medidas correctivas.

## A) INSPECCIÓN.

Los artículos 4 y 5 del propio Reglamento de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, establece los procedimientos que deberá realizar dicha comisión para los efectos de inspección, como se demuestra a continuación:

**“Artículo 4.- La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las Entidades Supervisadas o Personas, con el objeto de comprobar el estado en que se encuentran estas últimas, incluyendo la situación sobre su liquidez, solvencia y estabilidad, así como el adecuado cumplimiento de las disposiciones aplicables. El ejercicio de esta facultad podrá realizarse respecto de información ya sea general o específica que se estime necesaria o, en su caso, a través de muestras representativas y aleatorias de la**



documentación e información, registros, sistemas o equipos automatizados de las Entidades Supervisadas o Personas y para lo cual la Comisión podrá:

I. Revisar, verificar, comprobar y evaluar las operaciones, la organización, el funcionamiento, los procesos, los sistemas de control interno, de administración de riesgos y de información de las Entidades Supervisadas o Personas;

II. Revisar, verificar, comprobar y evaluar el patrimonio, la adecuación del capital a los riesgos a que se encuentran expuestas, la calidad de los activos y, en general, la situación financiera de las Entidades Supervisadas o de las Personas;

III. Revisar que las Entidades Supervisadas o Personas se ajusten al cumplimiento de las disposiciones legales que las rigen y a los sanos usos y prácticas de los mercados financieros;

IV. Investigar hechos, actos u omisiones de los cuales pueda presumirse la violación a las leyes y demás disposiciones que rigen a las Entidades Supervisadas o Personas, dentro del ámbito de competencia de la Comisión y cuando así lo prevean las leyes, y

V. Dar seguimiento a las observaciones y medidas correctivas que, en términos de lo previsto en el Título Cuarto de este Reglamento, formule la Comisión como resultado del ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia.

Para los efectos a que se refiere el presente artículo, la Comisión podrá obtener la información y documentación contable, legal, económica, financiera y administrativa que resulte necesaria, de conformidad con las disposiciones aplicables.

**Artículo 5.-** Las visitas de inspección que la Comisión lleve a cabo podrán ser ordinarias, especiales o de investigación.

(...)"

De la anterior transcripción es claro que, tratándose de la inspección, la Comisión realizará una serie de despliegues para llevar a cabo dichas visitas a las entidades supervisadas o personas, las cuales pueden ser de carácter, ordinarias, especiales o de investigación, donde se desprende las siguientes actividades:

- Efectúa la verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados.
- Revisa, verifica, comprueba y evalúa las operaciones, la organización, el funcionamiento, los procesos, los sistemas de control interno, de administración de riesgos y de información.
- Investiga, y revisa que se ajusten al cumplimiento de las disposiciones legales.
- Da seguimiento a las observaciones y medidas correctivas, como resultado del ejercicio de sus facultades de inspección





## B) VIGILANCIA

Por su parte los artículos 43, 44, 45 y 46 de dicho reglamento establecen los procedimientos que deberá desplegar la Comisión tratando de vigilancia de las entidades supervisadas, como se demuestra a continuación:

**“Artículo 43.-** La vigilancia se efectuará a través del análisis de la información contable, legal, económica, financiera, administrativa, de procesos y de procedimientos que obtenga la Comisión con base en las disposiciones que resulten aplicables, con la finalidad de evaluar el apego a la normatividad que rige a las Entidades Supervisadas o Personas, así como la estabilidad y correcto funcionamiento de las Entidades Supervisadas. El ejercicio de esta facultad podrá realizarse respecto de información ya sea general o específica que se estime necesaria o, en su caso, a través de muestras representativas y aleatorias de la documentación e información de las Entidades Supervisadas o Personas, a que se refiere este artículo.

**“Artículo 44.-** Las Entidades Supervisadas o Personas deberán entregar a la Comisión la información y documentación que señalen las leyes aplicables y disposiciones de carácter general, dentro de los plazos, periodicidad y formalidades previstas en los referidos ordenamientos. La información y documentación deberá entregarse a través de la oficialía de partes de la Comisión.

**“Artículo 45.-** La Comisión, mediante reglas de carácter general, determinará los casos en que las Entidades Supervisadas o Personas deberán entregar la información que ésta les requiera, a través de sistemas electrónicos establecidos por la propia Comisión.

La información que se entregue por los medios a que se refiere el párrafo anterior deberá cumplir con las características que para tales efectos se señalen en las disposiciones aplicables. En todo caso, los sistemas electrónicos deberán generar un acuse de recibo electrónico para la Entidad Supervisada o Persona.

**“Artículo 46.-** Sin perjuicio de la información y documentación que las Entidades Supervisadas y Personas deban proporcionarle periódicamente, la Comisión podrá, mediante oficio y dentro del ámbito de las disposiciones aplicables, solicitar a las Entidades Supervisadas o Personas la información y documentación que requiera para poder cumplir con su función de vigilancia. La información y documentación que se solicite en términos de este artículo deberá entregarse a través de la oficialía de partes de la Comisión y dirigirse a la unidad administrativa que haya realizado la solicitud, dentro del plazo que al efecto se haya señalado.

Las Entidades Supervisadas o Personas podrán entregar la información que la Comisión les requiera en términos de este artículo, a través de medios o sistemas electrónicos, sujetándose a las disposiciones que los regulen.”

De igual forma, tratándose de vigilancia, la Comisión realizará una serie de despliegues para efecto de las entidades financieras cumplan con las disposiciones aplicables, las cuales a grandes rasgos consisten en las siguientes actividades:

- Realiza un análisis de la información contable, legal, económica, financiera, administrativa, de procesos y de procedimientos proporcionada por la entidad supervisada.
- Evalúa la estabilidad y correcto funcionamiento de las entidades supervisadas.
- Recibirá para su análisis, la información y documentación que señalen las leyes aplicables a través de la oficialía de parte de la Comisión.
- Determina reglas de carácter general, para efecto de recibir la información solicitada de las entidades supervisadas a través de sistemas electrónicos implementados, generando con ello un acuse de recibo electrónico.
- Mediante oficios y dentro del ámbito de las disposiciones aplicables, podrá solicitar a las entidades supervisadas o personas, la información y documentación que requiera a través de medios electrónicos, para poder cumplir con su función de vigilancia.

### **C) OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.**

Posteriormente de conformidad con los artículos 49 y 50 de dicho ordenamiento, una vez analizada la información recabada por parte de la Comisión, esta podrá realizar observaciones o recomendaciones en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia a las entidades supervisadas a fin de que se mejore el sistema de control de procesos como se demuestra a continuación:

**“Artículo 49.- La Comisión podrá realizar observaciones a las Entidades Supervisadas o Personas cuando, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, detecte elementos de los que puedan derivarse, actos u omisiones que impliquen el probable incumplimiento de las disposiciones aplicables o de las sanas prácticas de los mercados financieros.**

También podrá formular recomendaciones para que las Entidades Supervisadas o Personas mejoren sus sistemas de control o procesos.

**“Artículo 50.- La Comisión, cuando resulte procedente, comunicará a la Entidad Supervisada o Persona las observaciones o recomendaciones a que se refiere el artículo anterior, mediante oficio que deberá estar debidamente fundado y motivado...**

(...)”.

De lo anterior se advierte que la Comisión Nacional Bancaria de Valores una vez que realice la supervisión a las instituciones financieras y encuentre algunas irregularidades dentro de los procedimientos de inspección y vigilancia realizará las siguientes actividades:

- ❖ Elabora Oficios de observaciones en los que se hace del conocimiento de los Sujetos Obligados los incumplimientos detectados a la normatividad en la materia, así como las áreas de oportunidad identificadas durante el transcurso de la visita.

- ❖ También podrá formular recomendaciones para que las entidades supervisadas o personas mejoren sus sistemas de control o procesos.
- ❖ Comunicará a la Entidad Supervisada o Persona las observaciones o recomendaciones, mediante oficio que deberá estar debidamente fundado y motivado
- ❖ Da seguimiento a las observaciones y medidas correctivas que formula la como resultado del ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia.

#### **D) MEDIDAS CORRECTIVAS, ADOPCIÓN DE ACCIONES Y CUMPLIMIENTO FORZOSO.**

Asimismo, el artículo 52 de dicho reglamento establece lo siguiente:

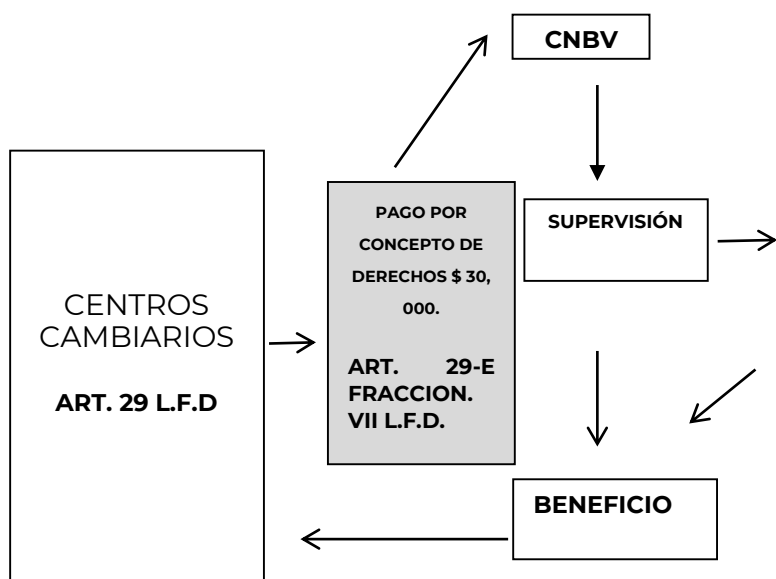
**“Artículo 52.-** La Comisión podrá, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, ordenar a las Entidades Supervisadas o Personas, mediante oficio, la adopción de las acciones o medidas tendientes a corregir los hechos, actos u omisiones que, derivado de sus funciones de inspección y vigilancia, haya detectado, a fin de que dichas Entidades Supervisadas o Personas ajusten sus actividades y operaciones a las leyes que les sean aplicables, a las disposiciones de carácter general que de ellas deriven, a los sanos usos mercantiles, bancarios y bursátiles, así como a las sanas prácticas de los mercados financieros.

Las medidas que determine la Comisión para corregir las irregularidades que se presenten o para prevenir las que puedan presentarse, podrán llevarse a cabo mediante el establecimiento de acciones, medidas correctivas o programas de cumplimiento forzoso para las Entidades Supervisadas o Personas, de conformidad con lo previsto en la Ley, así como en las leyes que regulan a dichas Entidades o Personas y demás disposiciones aplicables.”

Finalmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en atención a las observaciones y recomendaciones realizará las siguientes acciones:

- Puede ordenar a las entidades supervisadas o personas, mediante oficio, la adopción de las acciones o medidas tendientes a corregir los hechos, actos u omisiones que, derivado de sus funciones de inspección y vigilancia.
- Puede corregir a las entidades supervisadas, las irregularidades que se presenten o para prevenir las que puedan presentarse.
- Realiza establecimiento de acciones, medidas correctivas o programas de cumplimiento forzoso, en caso de desacato a las observaciones o recomendaciones.

El anterior despliegue que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hacia las entidades supervisadas, de conformidad con el pago establecido en el artículo 29-E de la Ley Federal de Derechos queda demostrado con la siguiente gráfica:



**INSPECCIÓN:**

- a) Visitas (ordinarias, especiales e investigación)
- b) Verificación de auditoría de registros de sistemas en las instalaciones o equipos automatizados de las Entidades Supervisadas o Personas.

**Art. 4 y 5 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores**

**VIGILANCIA:**

- a) Análisis de la información contable, legal, económica y financiera, administrativa de procesos y de procedimientos que obtenga la Comisión con base en las disposiciones que resulten aplicables, con la finalidad de evaluar el apego a la normatividad que rige a las Entidades Supervisadas o Personas.

**Art.43, 44, 45 y 46 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores**

**OBSERVACIONES:**

- a) Cuando se detecten elementos de los que puedan derivarse hechos actos u omisiones que impliquen el probable incumplimiento de las disposiciones aplicables o de las sanas prácticas de los mercados financieros.
- b) **Art.49 y 50 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores**

**RECOMENDACIONES:**

- a) Para mejorar el sistema de control y procesos.  
**Art.52 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.**

**COSTO DEL ESTADO**

DESPLIEGA SU ACTIVIDAD EN FORMA PARTICULARIZADA LO CUAL GENERA UN COSTO AL ESTADO DE MANERA CONSTANTE Y PERMANENTE.

De lo anterior se colige que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que pueda cumplir con el servicio de supervisión de las entidades supervisadas, debe realizar diversas erogaciones, como es el establecimiento de equipos de cómputo a través del cual se recibe los reportes y documentación

de las entidades, los sueldos del personal que integra el área especializada para revisar la información proporcionada, así como el de los supervisores que llevan a cabo las visitas procedentes, en cualquiera de sus modalidades, entre otros costos que se relacionan indirectamente.

Por otro lado, resulta oportuno transcribir la exposición de motivos del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2011, específicamente su artículo 56, en el que se otorgó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (C.N.B.V.), entre otras, la facultad de ejercer la inspección y vigilancia de **los centros cambiarios**, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones y operaciones que pudiesen configurarse como delitos en términos del Código Penal Federal, lo cual quedó plasmado en la exposición de motivos que se transcribe a continuación:

#### **"Exposición de Motivos.**

Artículo 56.- **La inspección y vigilancia** de las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio **queda confiada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores**, la que tendrá, en lo que no se oponga a esta Ley, respecto de dichas organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere la Ley de Instituciones de Crédito.

**En lo que respecta a** las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, **los centros cambiarios** y los transmisores de dinero, **la inspección y vigilancia de estas sociedades, se llevará a cabo por la mencionada Comisión**, exclusivamente para verificar el cumplimiento de los preceptos a que se refiere el artículo 95 Bis de esta Ley y las disposiciones de carácter general que de éste deriven.

**Las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio deberán rendir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la forma y términos que al efecto establezcan, los informes, documentos y pruebas que sobre su organización, operaciones, contabilidad, inversiones o patrimonio les soliciten para fines de regulación, supervisión, control, inspección, vigilancia, estadística y demás funciones que, conforme a esta Ley u otras disposiciones legales y administrativas, les corresponda ejercer."**

(Énfasis añadido)

Así las cosas, por **congruencia legislativa derivada de la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito**, resultó **indispensable reformar también la Ley Federal de Derechos, pues al confiarse la inspección y vigilancia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de los centros cambiarios**, se adiciona la fracción VII al artículo 29-E, a efecto de prever el pago de un derecho de supervisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 95 Bis de la citada Ley, es decir, por la inspección y vigilancia a cargo de dicha entidad, tal como fue justificada en la Exposición de Motivos correspondiente de la manera siguiente:

"(...)





### **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**

Mediante el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2011, **se otorgó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras, la facultad de ejercer la inspección y vigilancia de los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen configurarse como delitos en términos del Código Penal Federal.** En tal virtud, **se considera necesario incorporar en la Ley Federal de Derechos una cuota fija por los servicios de inspección y vigilancia que proporcione dicha Comisión a las mencionadas sociedades, así como precisar la fecha a partir de la cual comenzarán a cubrir los derechos correspondientes.**

Por otra parte se propone efectuar diversos ajustes para precisar la información financiera que debe considerarse para efectos del cálculo de los derechos por inspección y vigilancia que pagan las sociedades de inversión.

(...)"

En tal sentido, ese H. Juzgado podrá advertir que el establecimiento del pago del derecho - por los servicios de inspección y vigilancia a cargo de la C. N. B. V. - se encuentra plenamente justificado, pues tal como se advierte de la exposición de motivos citada en líneas anteriores, ante la problemática advertida por el legislador **respecto del funcionamiento de los centros cambiarios, las personas que realizan actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero**, fue necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejerciera de manera más constante una supervisión y vigilancia a dichos entes, por lo que fue necesario incluir en la Ley Federal de Derechos específicamente en su artículo 29-E, la fracción VII, tratándose de sociedad financieras de objeto múltiple, entidad no regulada, una cuota por concepto del servicio de inspección y vigilancia, de la Ley Federal de Derechos.

Es importante señalar que **la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, al resolver los amparos en revisión **108/2013, 416/2013, 231/2013 y 100/2013** así como **la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, al resolver el amparo en revisión **227/2013**, ya se ha pronunciado respecto a la constitucionalidad del artículo 29-E fracción VII de la Ley Federal de Derechos, al señalar que no resulta violatorio de los derechos de proporcionalidad y equidad.

### **"AMPARO EN REVISIÓN 108/2013**

**De acuerdo con tales reflexiones, se considera que el artículo 29-E, fracción VII de la Ley Federal de derechos, al establecer imponer a las personas físicas o morales, que pertenezcan al sector de centros cambiarios, transmisiones de dinero o sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas a que se refiere la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la obligación de pagar derechos por los servicios de inspección y vigilancia que les presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para supervisar que cumplan las disposiciones establecidas en el artículo 95 Bis de la citada legislación, conforme a una cuota fija anual de \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), no viola en forma alguna el principio de proporcionalidad consagrada en el artículo 31, fracción IV, constitucional,** pues



# HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

## PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS

Dirección General de Amparos Contra Actos Administrativos  
Dirección de Amparos contra Actos Administrativos "A"

el parámetro de medición seleccionado por el legislador tributario federal para cuantificar la mencionada cuota resulta razonable y congruente con el costo que representa para dicho órgano desconcentrado la prestación del servicio relativo, en virtud de que realiza una fiscalización constante y uniforme en todos los sistemas o equipos automatizados de las sociedades revisadas, a través de muestras representativas y aleatorias de la documentación información y registros que deben reportarle periódicamente habida cuenta que las visitas ordinarias se realizan con base en un programa anual en el que se contemplan a todos los participantes en dicho sector auxiliar, y solo en los casos en que sea necesario podrá practicarse una visita especial, para examinar o corregir situaciones especiales operativas, así como una visita de investigación para aclarar una situación específica y en su caso emitirse un oficio de observaciones o recomendaciones para que se subsane determinada irregularidad o se mejoren los sistemas de control o procesos, **por lo que es inconcuso que no se puede graduar de distinta manera la intensidad del uso de dicho servicio, pues todos sus usuarios lo utilizan en la misma medida por la simple actualización del hecho imponible y, por ende, existe congruencia y un razonable equilibrio entre el tipo de servicio, su objeto y el factor para individualizar su costo, pues deben pagar en la misma proporción todos los usuarios del aludido servicio, máxime que no se advierte que la cuantía de la cuota fija sea ruinosa sino fue establecida como un valor aproximado de los costos de la autoridad, que tiene asidero dentro del ámbito de libertad configurativa reservada al Poder Legislativo de ahí que resultan infundados los conceptos de violación.**

Por lo anterior expuesto se solicita a ese H. Juzgado, **NEGAR** el amparo y protección a la parte quejosa.

### DESIGNACIÓN DE DELEGADOS.

En términos y para los efectos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se señalan como delegados y número de registro de sus respectivas cédulas profesionales ante el Consejo de la Judicatura Federal: Maestra Grisel Galeano García (5241070) y los Licenciados **Manuel Eduardo Mendoza Jiménez (7033392)**, Juan Carlos Pinson Guerra (1853889), Mayte Vázquez Delgado (10166629), Mario López Mendoza (5590526, 152045), Jesús Uriel Solano Alfaro (8272796, 152084), **Claudia Pina Manzano (7443782, 152310)**, **Marlene Merlo Serna (11064651)**, Lawrence Salome Flores Ayvar (3936074), Nadia Rabadán Carrillo (8730958), Carlos de la Vega Clemente (6486013, 107285), Juan Pablo Salazar Ponce (1853889), Jorge Arturo Aldrete Pizano (6204678, 152593), Luis Gilberto Trejo Vargas (9650280, 165126), Paulina Acalco Rivera (9073623), **Héctor Alberto Vilchis Hernández (6916039, 152311)**, Marisol Santibáñez Sánchez (8081437), Wendy Elizalde Axotla (09106993), Alejandro López Soria (09297955, 162801), Luis Alejandro Jiménez Libreros (8725524, 152051), **Verónica Uribe Cedillo (7173051, 152006)**, **Jesica Tapia Rodríguez (8754954, 152601)**, **Irais González Rodríguez (7402812)**, Blanca González Velázquez, (10914962), Fernando Said Zapata Zamora (10909130), Ricardo Manuel Treviño Gonzalez (3688705), Juan Carlos Valles Chanes (4810103, 94876), **José de Jesús Arreola Pacheco (09273296)**, **Karla Dioselin Padilla Ramírez (11044227)**, **Jesús Jaramillo Camacho (12670882)**, Carlos Alvarado Sandoval (8130039, 183479), Edgar Daniel Hernández Herrera (8739710, 183299), Elizabeth Luna Oliver (2838756), Pamela Monserrat Castillo Hurtado (09583268, 164809), Gilberto Antonio Penagos Fus (5267900, 95314), **Patricia Sánchez Martínez (7281341, 152048)**, Miguel Lohman Mayorga (4107710, 63556), Karla Gabriela Miranda Zavala (4703517, 62887), Stephanie Yare Arreola Dávila (10355989, 174183), Yessica Varela Huerta (5787565, 171411), Irais Ávila Medina (10034697 Rosa María Elena Sosa Morán (1940233, 180754), Elizabeth Romero Aldana (11530335), Daniela Nataly Coria Castillo (10165828), Gabriela Medina Cassab (11693074), Itzia Naomi Rangel Herrera (09162615), **Jorge Abraham Sánchez González (8957750)**, **Ivanna Ortiz Quino (12061607)** y Carlos Eduardo Herrera Hernández (970646) para todos los efectos legales a que haya lugar; asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a los pasantes en derecho: Miguel Lozada Obregón, **Brenda Alhelí Patiño Castañeda**, **Rafael Hernández Rivera**, **Alejandro Gonzalez Figueroa**, Karina Montiel Martínez, Elvia Nallely Rojas Carrillo, Christian Morales Cruz, Álvaro Sánchez Valle, Oscar



Daniel Ontiveros Margarito, Juan Manuel Mateos Durán, Iván Jovani Pérez Ramírez, Gustavo Alberto Serrano Olachea, Paola Castillo Skiu, Cynthia Danitza Gutiérrez Romero, Eréndira Nayeli Hernández Toral, Daniela Medina Casaab, Cinthya Rodríguez Hernández, Eduardo Said Palacios Estrada, Esmeralda Azyadeth Rodríguez Torres, Isaac Daniel Segura Salazar, Sandra Gaytán Rivera, **Erick Vázquez Pineda**, Roberto Carlos Gómez Martínez, **Ximena Aparicio Clemente**, **Carlos Cristóbal Puga Cruz**, Joss Frederick Ruiz Cruz y **Eduardo Daniel Perdomo Cortés**.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a ese **C. Juez de Distrito**, atentamente pido se sirva:

**PRIMERO.** Tener por rendido en tiempo y forma el presente **INFORME JUSTIFICADO**, en el juicio de amparo citado al rubro.

**SEGUNDO.** Previos los trámites de ley, **SOBRESEER** en el juicio con apoyo en las argumentaciones antes expuestas, o en su caso, **NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL** al quejoso.

**TERCERO.** Tener como delegados a las personas que se mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones.

**CUARTO.** Acordar de conformidad la solicitud de **interconexión**

**En representación del Presidente de la República, el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos**, con fundamento en el artículo 9, segundo párrafo de la Ley de Amparo, en relación con los Artículos Segundo, Tercero, fracción VI, numeral **30** del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día **25 de marzo de 2019** y artículos 4, primer párrafo, Apartado D, fracción II y 28, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente y en suplencia por ausencia de este último y por ausencia de la Directora General de Amparos contra Leyes, con fundamento en los artículos 4, primer párrafo, Apartado D, fracción II, incisos a) y b) y 50, séptimo párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente, firma.

**ATENTAMENTE.**

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.**

**EL DIRECTOR GENERAL DE AMPAROS CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS.**  
**LIC. MANUEL EDUARDO MENDOZA JIMÉNEZ.**

**RESPONSABLE DEL PROYECTO: LIC. CLAUDIA PINA MANZANO.**

**IOQ/XAC**  
**529-III-DGACAA-DAA-(XAC)-46582**



HOJA DE FIRMAS ELECTRÓNICAS DEL DOCUMENTO...

Evidencia Criptográfica – Transacción

Autoridad Certificadora: A.C. del Servicio de Administración Tributaria

Archivo firmado: 1682710642766

---

Nombre: MANUEL EDUARDO MENDOZA JIMENEZ Validez: OK Vigente

# Serie: 00001000000504228876 Revocacion: OK No Revocado

Fecha firmado: (UTC/CDMX) vie, abr 28, 2023 11:09:11 PM UTC / 28/04/2023 17:09:11 Status: OK Valida

Algoritmo: SHA256withRSA

Firma Electrónica:

6c 42 62 55 78 69 67 44 7a 55 30 41 35 34 74 6f  
4e 49 58 67 50 70 78 73 6a 43 75 47 38 33 6a 35  
76 78 35 42 43 56 57 72 64 51 74 33 34 6f 67 65  
4f 52 5a 35 2b 73 6a 45 35 39 69 34 35 4d 4b 4c  
32 54 70 61 4a 64 46 47 6e 64 41 6c 6e 76 6e 31  
2f 73 77 43 4f 54 79 6c 62 2b 6b 6f 46 66 53 67  
66 65 4b 42 32 71 69 55 6c 42 52 73 63 4c 57 4e  
6d 6a 34 56 51 75 62 68 77 42 4c 66 38 76 69 74  
4f 32 51 4a 53 54 55 71 4b 52 4c 6d 50 54 73 5a  
47 76 6c 52 39 69 41 79 4b 71 2b 6d 66 4f 5a 55  
46 76 41 79 6c 43 48 48 57 6f 74 32 73 4c 69 30  
42 6d 54 2b 71 6c 52 52 67 6d 54 75 50 31 6d 32  
4d 47 35 38 62 39 76 79 78 52 34 49 5a 6e 64 4f  
4f 35 4b 64 38 50 6b 5a 35 49 6e 53 50 32 65 55  
39 58 55 45 4b 57 53 78 47 44 66 67 39 7a 37 31  
4d 4f 6c 6f 4c 48 38 32 45 71 79 6f 48 50 42 65  
70 6c 57 76 4c 6c 31 51 36 37 64 4b 36 45 58 69  
67 62 39 5a 49 37 41 32 2b 69 2f 61 65 48 65 6d  
45 36 42 46 56 67 38 58 48 64 75 65 6c 41 6d 36  
66 53 6a 33 6a 5a 45 45 55 47 77 77 4e 68 39 6d  
43 70 42 71 6a 69 62 77 7a 33 34 59 45 62 54 53  
65 6e 4c 71 48 41 3d 3d

---

OCSF

Fecha: (UTC/CDMX) vie, abr 28, 2023 11:08:55 PM UTC / 28/04/2023 05:08:55

Nombre del respondedor: Servicio OCSF SAT

Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA

# Serie: 00001088888800000039

---

Con fundamento en los artículos 1, 3 - fracción II, 7, 10, 14, 22, 31 y demás relativos y aplicables de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, se hace constar que los documentos electrónicos y los mensajes de datos que cuenten con firma electrónica avanzada producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos.

Para verificar la validez del documento favor de ingresar a <https://www.mst.hacienda.gob.mx> aplicación FED opción Validar documentos.